

prema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Aza.*—*Simon Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Juan A. Mateos*, secretario.

Es copia que certifico. México, Mayo 7 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el juzgado de distrito de Ixtulgo por el Lic. Ignacio Duran, contra el Administrador de rentas de Apam, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: que el representante jurídico de D. Manuel Piña y Savignon, Lic. Ignacio Duran, ha elevado á V. un ocurso el 30 de Enero último solicitando se ampare y proteja á su poderlante contra el administrador de rentas de Apam, que al haberle exigido ejecutivamente el pago de trescientos veintiocho pesos noventa y cinco centavos, como contribucion de diez al millar por el capital de veintiseis mil trescientos veinte pesos, que la hacienda de Ocotepes reconoce á favor de establecimientos de beneficencia y dotes de monjas enclastradas, viola las garantías de los artículos 101, 102 y 16 de la Constitucion general.

Es indisputable que por las leyes generales de 26 de Febrero y 16 de Marzo de 1861, los capitales á favor de las señoras religiosas y de la beneficencia, quedaron exceptuados de pagar toda clase de impuestos y contribuciones; lo es así mismo que por el decreto número 88 de 30 de Noviembre

de 1870 que reglamentó los impuestos del Estado para el año de 71, y que no exceptuó á los mencionados bienes de beneficencia y dotes de monjas, se invaden las atribuciones de los poderes federativos, supuesto que las citadas leyes generales deben existir en contra de la del Estado, segun el tenor del artículo 126 del pacto fundamental, y siendo esto verdadero lo es tambien que la única autoridad competente para decretar tales impuestos, es la federal.

Sentado esto, el promotor opina como el quejoso, por manero que el pago hecho por D. Manuel Piña y Savignon á la administracion de Apam, es indebido, y la orden proveniente del administrador ilegal.

Por todo lo expuesto y fundado en los artículos 101 y 102 de la Constitucion general, el que suscribe pide al Juzgado se digno declarar que habiendo violacion del artículo 16 la Justicia federal ampara y protege al solicitante.

Pachuca, Febrero 22 de 1873.—*M. Sanchez.*

OTRO PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

En el juicio de amparo intentado por el Lic. Ignacio Duran en representacion de D. Manuel Piña y Savignon contra el administrador de rentas de Apam, por violacion de garantías, el promotor, su estado supuesto, dice: que en su concepto la confesion hecha por el administrador de Apam, confirmando los puntos en que fundó el quejoso su solicitud, basta para resolver la cuestion que surge de derecho.

Sabido es que las leyes de 26 de Febrero y 16 de Marzo 1861 han sido expedidas por el gobierno federal con el exclusivo objeto de que quedando libres de todo impuesto los capitales de beneficencia pública y dotes de religiosas exclaustradas, los productos se inviertan en el sostenimiento de

la instrucción y sustento de las segundas. Sabido es también, que las leyes expresadas por ser de las llamadas de reforma han tenido el carácter de generales, y bajo este concepto ratificadas y sancionadas por otras leyes, sea por ejemplo la de 11 de Diciembre de 1856 que previene se salven las leyes de reforma.

Siendo estas leyes emanadas de la autoridad suprema, es inconcuso que tanto los jueces como las demás autoridades de los Estados deben hacer que tengan su mas exacto cumplimiento (artículos 126 y 114 de la Constitución general).

Por estas razones y fundamentos, el suscrito promotor concluye con la proposición siguiente: El Juzgado de Distrito, con fundamento de los artículos 101 fracción 1ª y 3ª del propio Código fundamental, declara: que la Justicia federal ampara y protege á D. Manuel Piña y Saviñon contra el administrador de rentas de Apam, que viola en su persona la garantía de que se queja.

Pachuca, Marzo 21 de 1873.—*M. Sanchez.*

Es copia que certifico. Pachuca, Marzo 20 de 1873.—*H. Briseño.*

Sentencia del Juez de Distrito.

Pachuca, Marzo 28 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido por el Lic. Ignacio Duran en representación de D. Manuel Piña y Saviñon, contra el C. administrador de rentas de Apam, que le exige, en virtud de la contribucion del diez al millar impuesta por decreto del Estado número 88 de 30 de Noviembre de 1870, la cantidad de trescientos veintiocho pesos noventa y cinco centavos que causa el capital de veintiseis mil trescientos veinte pesos, que la hacienda de Ocotepec reconoce á la beneficencia pública y dotes de monjas, alegando el agravio que estando estos capitales exceptuados de todo impuesto, por las leyes genera-

TOMO IV.—PARTE II.

les de 26 de Febrero y de 16 de Marzo de 1871, los procedimientos del C. administrador contrarian estas disposiciones que solo el gobierno general puede derogar, invaden por lo mismo la esfera de la autoridad federal y violan también la garantía del artículo 16 del Código fundamental. Visto el informe de la autoridad responsable en el que para justificar el cobro, niega á las dichas leyes el carácter de generales, propiamente hablando, y el de obligatorias por tanto para este Estado. Vistos los alegatos producidos, la citación para sentencia y cuanto fué preciso; y considerando: primero, que las referidas leyes de 26 de Febrero y de 16 de Marzo de 1861 exceptúan de todo impuesto los capitales de beneficencia y dotes de monjas; segundo, que estas leyes se elevaron al rango de leyes generales y obligatorias para toda la Union (decreto de 28 de Marzo del mismo año); tercero, que mientras no se reclame en toda forma, por los medios establecidos, contra la inconstitucionalidad de esas disposiciones, porque vulneren y restrinjan la soberanía del Estado, ninguna autoridad de este puede contrariarlas (artículo 126 de la Carta federal); cuarto, que en consecuencia, al declararlas con sus procedimientos el C. administrador de rentas de Apam, sin vigor en el Estado, ó pretende derogarlas usurpando las atribuciones del Congreso general, ó las declara inconstitucionales usurpando las atribuciones de los tribunales federales á quienes corresponde únicamente esta facultad (artículo 101 fracción 2ª del mismo Código), resultando en cualquiera de estos extremos una invasion en la esfera de la autoridad federal; quinto, que aun sin necesidad de resolver si las mencionadas leyes de 26 de Febrero y 16 de Marzo, son ó no propiamente generales, es un hecho que en el Estado han sido reconocidas expresamente como tales por sus legislaturas (artículo 28 de la ley de 14 de Octubre de 1868 y 5ª de la de 30 de Setiembre de 1871), sin que obste el decreto número 88 de 30 de No-

viembre de 1870 que omitió este reconocimiento, ya porque una declaración tan importante no se destruye con una omisión sino por otra declaración en contrario, como porque la reproducen las leyes subsecuentes, siendo esta la razón por la que actualmente están exceptuados los capitales en cuestión de todo impuesto predial; sexto, que aun cuando no fuese evidente que el decreto número 88 no derogó el anterior de 14 de Octubre de 1868 en la parte en que reconoce como generales las leyes de que se trata, sí es disputable, por lo que el derecho del fisco en el caso presente no es claro é indudable como se necesita para que proceda la facultad económico-coactiva (artículos 2 y 3 de la ley de 20 de Enero de 1837 y Ejecutoria de la Suprema Corte de 11 de Marzo de 1871), resultando de todo esto, que los procedimientos del C. administrador de rentas de Apam en contra del C. Savignon no están fundados en causa legal como previene el artículo 16 de la Constitución general. Por lo expuesto, y con fundamento del artículo 101 fracción 1ª y 3ª del propio Código, se decreta: que la Justicia federal ampara y protege á D. Manuel Piña y Savignon contra los procedimientos del administrador de rentas de Apam, en virtud de los que se le exige, con la facultad coactiva, trescientos veintiocho pesos noventa y cinco centavos por contribucion impuesta al capital de veintiseis mil trescientos veinte pesos que la hacienda de Ocotepec reconoce á establecimientos de beneficencia y dotes de monjas, por importar dichos procedimientos una violacion de la garantía del citado artículo 16 y una invasion en la esfera de la autoridad federal. Hágase saber, exíjase la reposicion del papel sellado, publíquese, sáquense las copias respectivas para el Semanario Judicial y remítanse estos autos para los efectos legales á la Suprema Corte de Justicia. Así sentenció y firmó el C. Lic. Miguel Mejía, juez de Distrito del Estado de Hidalgo. Doy fé.—*M. Mejía.—Francisco Briseño.*

Es copia que certifico. Pachuca, Marzo 28 de 1873.—*F. Briseño.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Abril 15 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Hidalgo por el Lic. D. Ignacio Duran en representacion de D. Manuel Piña Savignon, contra el Administrador de rentas de Apam, quien cobró á Piña como representante de su padre, Lic. D. Manuel Piña y Cuevas, trescientos veintidos pesos noventa y cinco centavos por el diez al millar del capital de veintiseis mil trescientos veinte pesos que reconoce la hacienda de Ocotepec á bienes de beneficencia pública y dotes de monjas, contribucion impuesta por decreto del Estado de 30 de Noviembre de 1870, con cuya cobranza alega el quejoso que se vulnera en la persona de su representado la garantía á que se refiere el artículo 16 de la Constitución federal, no solo por hacerse por autoridad que no es competente, sino tambien porque no se motiva ni puede motivarse el procedimiento, en virtud de que el decreto citado invade la esfera de la autoridad federal, porque capitales como los de que se trata, están exceptuados de todo impuesto por las leyes de 26 de Febrero y 16 de Marzo de 1861; y considerando: que estas leyes están elevadas al rango de generales por la de 23 del mismo mes de Marzo de dicho año: que las leyes del Congreso de la Union son ley suprema de ella, segun el artículo 126 de la carta fundamental, y los Estados no pueden dictar otras en contrario: que por lo mismo, el decreto del Estado de Hidalgo de 30 de Noviembre de 1870 no puede prevalecer sobre aquellas leyes, y menos si se atiende á que el Estado de Hidalgo las ha reconocido, como es de verse en el artículo 2º del decreto de 14 de Octubre de 1868 y 5º del de 30 de Setiembre de 1871,